



LA FUNCIONARIA EJECUTORA GRUPO JURIDICO –COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO DE  
LA REGIONAL BOLIVAR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF

HACE SABER

Que para efectos de surtir el trámite de la notificación por AVISO, de la Resolución de Terminación del Proceso N° 003 de 22/01/2018 proferido dentro del proceso Administrativo Coactivo 142 de 2009 seguido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, contra la sociedad CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA. Con NIT: 900.041.040, se ha enviado oficio radicado bajo el número S-2017-399942-1300 el día 31/07/2017 al representante legal de la empresa a la dirección: barrio Blas de Lezo Manzana N Lote 26 Segunda Etapa en la ciudad de Cartagena, Dpto. de Bolívar, guía devuelta por la causal: "No Reside", tal y como consta en la guía RN799923492CO de la Empresa de Servicios Postales Nacionales 4/72.

En vista de que se desconoce la dirección de la sociedad CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA. y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a notificar a la sociedad CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA. de la Resolución N° 003 de 22/01/2018, que en su parte resolutive establece: **ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE LA PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro de la obligación que posee la empresa CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA, NIT: 900.041.040, por un capital de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$4.579.799), más los intereses que se hayan generado. ARTICULO SEGUNDO: DAR POR TERMINADO el proceso administrativo de cobro adelantado en contra de la empresa CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA, NIT: 900.041.040, expediente radicado con el N°142-09. ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la presente decisión a la Coordinación del Grupo Financiero de la Regional para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente. ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presente resolución a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia, allegando copia de la Resolución y del memorando remisorio a la Oficina Asesora Jurídica. ARTÍCULO QUINTO: LEVANTAR las medidas cautelares decretadas dentro del proceso ORDENESE la entrega de títulos judiciales en el evento de que se hubieren generado como consecuencia de las medias cautelares decretadas. ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE al representante legal de la empresa CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA, del presente acto administrativo conforme al art. 565 y siguientes del E.T.N. y demás normas concordantes ARTICULO SEPTIMO: ARCHÍVESE el expediente y háganse las anotaciones respectivas. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Cartagena de Indias D.T y C, el 22 de enero de 2018 OLGA EDEL JIMENEZ LEON (con firma) Funcionaria Ejecutora Grupo Jurídico – Cobro Coactivo"**

Por AVISO: Para que sirva de legal notificación, se fija el presente aviso en lugar de acceso a oficina de recepción y en la Página Web de la entidad, por el termino de CINCO (5) días hábiles, desde hoy nueve (09) de marzo de 2018 a las 8:00 AM y hasta las 6:00 PM del día quince (15) de marzo de 2018, de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 69 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Art. 58 de la Ley 0019 de 2012. Advirtiéndole que la presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

  
OLGA EDEL JIMENEZ LEON  
Funcionaria Ejecutora

Grupo Jurídico – Cobro Administrativo Coactivo  
ICBF, Regional Bolívar.

Desfijado el día \_\_\_\_ del mes \_\_\_\_ de 2018 a las 06:01 P.M.

Firma funcionario ejecutor.

## RESOLUCION Nro. 003 del 22 de enero de 2018

“Por medio de la cual se declara la prescripción de la acción de cobro respecto la obligación en contra de la empresa **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA NIT: 900041040**, radicado bajo el N°142-09.

La Funcionaria Ejecutora del ICBF - Regional Bolívar, en uso de las facultades conferidas por el art. 5 de la Ley 1066 de 2006, artículos 98 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario, la Resolución No. 0384 del 11 de febrero de 2008 emanada de la Dirección General del ICBF, “*Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en el ICBF*”, y la Resolución No. 0135 del 22 de febrero de 2017, proferida por el Director del ICBF Regional Bolívar, por medio de la cual se asignan funciones de ejecutor a un servidor público,

### ANTECEDENTES

Que mediante **Auto N°217 del 24 de septiembre de 2009**, este despacho de Jurisdicción Coactiva **avocó** conocimiento de la documentación remitida del Grupo de Recaudo de la Regional para el cobro de la obligación contenida en la resolución **No 001319 del 20 de noviembre de 2008**, a cargo de **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA NIT: 900041040**, por un capital de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$4.579.799)**, por los periodos dejados de cancelar de aportes parafiscales de agosto de 2005 a septiembre de 2006.

Que la resolución **No001319 del 20 de noviembre de 2008** quedó **ejecutoriada** el **17 de diciembre de 2008**, según constancia de ejecutoría expedida por el Coordinador del Grupo Jurídico a folio 11.

Que mediante resolución **N°233 del 27 de noviembre de 2009**, se libró **mandamiento de pago** en contra del deudor **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA NIT: 900041040**, folios **21 a 24**, acto que fue notificado de forma **PERSONAL** el día 27 de noviembre de 2009, constancia a folio 25.

Que mediante **Auto N°271 de fecha 02 de septiembre de 2010** se decretaron **Medidas Cautelares** de **EMBARGO** de bienes muebles e inmuebles, de cuentas corrientes legalmente embargables de acuerdo con la Ley en cualquier Banco y/o Corporación a nombre de la demandada.

Que a folios 43 a 52 reposan los oficios de embargo dirigidos a las diferentes entidades financieras y a folios **53 a 58**, se encuentran oficios de algunos bancos informando la ausencia de cuentas o la ausencia de fondos de las mismas.

Que a folio 59 reposa oficio del banco Davivienda informando el registro del embargo de la cuenta de ahorro del demandado, pero sin lograr la retención de ninguna suma de dinero.

Que mediante Resolución **N°078 de fecha 13 de mayo de 2011** se **ordenó seguir adelante la ejecución** en contra de **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA** tal como venía contemplada en el mandamiento de pago, en el expediente no reposa constancia de notificación de esta resolución.

Que en cumplimiento a las disposiciones legales, este Despacho, adelantó la investigación de Bienes respecto a la sociedad **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA** con **NIT: 900.041.040**, mediante el Auto N°091 de fecha 26 de febrero de 2015, ante las autoridades competentes, tales como: La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y la Oficina Municipal de Tránsito y Transporte de Cartagena, folios 60 a 67.

Que a folios **68 y 69** se evidencia auto **N°169 de fecha 24 de septiembre de 2015**, por medio del cual se **liquida el crédito** y constancia de envío por correo de dicha liquidación del crédito a efectos de surtir el traslado, devuelta por la causal desconocido (fl 73) y otra constancia de fecha 23 de noviembre de 2016 devuelta por la causal no existe (fl 76).

Que en fecha **29 de abril de 2015** se envió al ejecutado, oficio informando los beneficios de la Ley 1739 de 2014 sobre rebaja de intereses, constancia a folios **67A a 67C** devueltos por la causal no reside.

Que se evidencia a folios **79 a 82** certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena en fecha 01 de junio de 2017, donde se certifica que la Sociedad **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA** se encuentra disuelta y en proceso de liquidación, esta última inscrita en fecha 27 de abril de 2016.

Que de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio sobre el estado de disolución y liquidación, se inició una búsqueda a fin de obtener alguna nueva dirección de ubicación del demandado en la internet, sin embargo, no obtuvimos resultado positivo alguno.

Que mediante certificación de deuda de fecha 25 de noviembre de 2017 expedida por el Coordinador Financiero del Icbf- Regional Bolívar, el saldo de la obligación a capital a cargo del deudor **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA NIT: 900041040**, con corte a 30 de noviembre de 2017 es por la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$2.373.419)** folio 83.

### CONSIDERACIONES

La Funcionaria Ejecutora una vez analizado el presente caso, teniendo en cuenta los documentos contentivos del expediente, expone las siguientes consideraciones de orden jurídico:

#### **PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO**

Las obligaciones son vínculos jurídicos entre dos o más personas determinadas o determinables, en virtud de los cuales una parte llamada acreedor, puede exigir de otra llamada deudor, el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Se hacen exigibles por el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición a la que se encuentran sometidas, o porque han nacido puras y simples. A partir de allí, la Ley faculta al acreedor respectivo para que ejerza las acciones que le permiten hacer efectiva la obligación, dentro de un límite temporal, que una vez cumplido, ocasiona la prescripción extintiva del derecho y la caducidad de la acción.

La prescripción extintiva de la acción de cobro de las obligaciones parafiscales se encuentra regulada en el artículo 817 del estatuto tributario y en el artículo 56 de la Resolución N° 384 de 2008; conforme a esta normatividad, el término de prescripción se configura al cabo de 5 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se ha hecho exigible, sin embargo, también constituye normatividad aplicable el artículo 25356 del C.C y el artículo 8 de la Ley 791 de 2002.

#### **TRANSITO DE LEGISLACION DE LA PRESCRIPCION**

Antes de la Ley 1066 de 2006, en materia de prescripción y tratándose de obligaciones parafiscales, nos remitíamos a las normas del Código Civil, donde se establecía un término de diez (10) años para la prescripción de la acción ejecutiva y veinte (20) años para la prescripción de la acción ordinaria, estos términos fueron modificados por la Ley 791 de 2002 la cual redujo estos términos a la mitad, quedando así la prescripción de la acción ejecutiva en cinco (5) años y la de la acción ordinaria en (10) años, estos términos entraron a regir a partir de la promulgación de la Ley, es decir, el día 27 de diciembre de 2002. Posteriormente con la entrada

en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el día 29 de julio de 2006, se remitió el proceso de cobro coactivo al procedimiento establecido en el **Estatuto Tributario Nacional**, quedando de esta forma que el término para la prescripción de las obligaciones parafiscales sería cinco (5) años.

Que de igual manera es preciso tener presente la modificación que introdujo el artículo 86 de la Ley 788 de 2002 al artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto al cómputo del término de prescripción que a la letra reza: **“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO: la acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:**

**“... 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.”** (Negritas fuera del texto).

Que estando así las cosas, encontramos pues que el término para contabilizar la prescripción a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión, el cual de conformidad con el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, es de cinco años.

Que de conformidad con lo anterior la administración cuenta con cinco (5) años para determinar la obligación correspondiente expidiendo el respectivo acto administrativo (título Ejecutivo), y cinco (5) años más contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo, para ejercer su cobro jurídico; esto significa que la prescripción operaría si en el lapso de cinco años la administración no ejecuta el cobro de la obligación determinada, y que para determinarla cuenta también con cinco años.

Que en virtud de lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 717 del Estatuto Tributario Nacional, la administración cuenta con un plazo perentorio de cinco (5) años para determinar el tributo u obligación correspondiente mediante la liquidación oficial, si el obligado, aportante o contribuyente no lo pagó durante todo el año de su causación, y cinco años más para cobrarla después de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo que lo determinó o liquidó oficialmente.

El Art. 818 del E.T.N. modificado por el Art. 81 ley 61 de 1992 contempla la interrupción y suspensión del término de prescripción y en su tenor literal establece: *“El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades de pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.*

*Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia de remate y hasta:*

*-La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,*

*-la ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el Artículo 567 del Estatuto Tributario.*

*- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contenciosa administrativa en el caso contemplado en el Artículo 835 del Estatuto Tributario.*

Para el caso *sub examine* el título ejecutivo lo constituye la Resolución **No 001319 del 20 de noviembre de 2008**, ejecutoriada el **17 de diciembre de 2008**, contentivo de las vigencias: **agosto de 2005 a septiembre de 2006**. Por tratarse de una resolución del año **2008** ejecutoriada el **17 de diciembre de 2008** y teniendo en cuenta que la legislación aplicable es el Estatuto Tributario Nacional, **Art. 817**, el término para la prescripción es de 5 años, la acción de cobro coactivo de dicha resolución prescribe el día **18 de diciembre de 2013**. Ahora bien, existen en las normas unas causales de interrupción de la prescripción, teniendo en cuenta que

la legislación aplicable a este caso sería la establecida en el Art. 818 del Estatuto Tributario, modificado por el Art. 81 ley 61 de 1992

Remitiéndonos a los hechos del caso en estudio, tenemos que el título ejecutivo: Resolución **001319 del 20 de noviembre de 2008**, quedó ejecutoriado el día **17 de diciembre de 2008**, por lo tanto, la acción de cobro coactivo de dicha resolución prescribiría el día **18 de diciembre de 2013**, salvo que antes de dicho termino se librara el mandamiento de pago y el mismo fuese notificado a la parte demandada y efectuado su cobro dentro del término de los cinco años siguientes; tenemos evidencia de que el mandamiento se emite el **27 de noviembre de 2009 (folios 21 a 24)** y su notificación se efectuó en forma personal el **27 de noviembre de 2009 (folio 25)**, interrumpiéndose con ello el término de la prescripción, e iniciándose un nuevo termino desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, es decir el **28 de noviembre de 2009 y hasta el 28 de noviembre de 2014**, para efectuar el cobro y agotar todas las etapas procesales.

Se observa en el expediente que dentro del nuevo término para continuar con el cobro se libró la orden de ejecución, Resolución **078 de 2011**, pero de esta no tenemos evidencia de haber sido notificada al demandado, esta fue la última actuación jurídica realizada dentro de la fecha límite establecida por la ley para realizar el cobro de la obligación, es decir el **29 de noviembre de 2014**, sin embargo el **24 de septiembre de 2015** se liquidó el crédito mediante el auto N°169, este fue puesto al correo para su notificación, pero el mismo fue devuelto por el servicio de aeromensajería en dos ocasiones, por las causales: desconocido (fl 73) y no existe (fl 76), actuaciones que a todas luces se realizaron de forma extemporánea, en este sentido, dentro del presente proceso el término de prescripción no fue interrumpido o suspendido por ninguna de las causales contempladas en el inciso segundo del art. **818 del E.T.N**, pues no se dio suspensión de la acción de cobro por no haberse llegado a diligencia de remate dentro de este término y como consecuencia de ello se dictara el auto de suspensión de la acción de cobro que menciona el citado **Art. 818**. Así las cosas, operó el **fenómeno de la prescripción** por haberse superado el término para adelantarlo y continuar con el mismo, lo cual ocurrió el día **29 de noviembre de 2014**.

Por otra parte observa el despacho que la empresa **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA**, de conformidad con certificado de existencia y representación expedido por la cámara de Comercio de Cartagena se encuentra disuelta y en liquidación (**fl 80**) y que habiéndose desplegado una búsqueda a través del internet, a la fecha en que se expide la presente resolución no ha sido posible su ubicación, así como tampoco se ha logrado la identificación de bienes a su nombre, situación que convierte esta obligación como de **difícil cobro**, conforme a lo estipulado en el artículo 44 numeral 5.2 de la Resolución 384 de 2008, causal que sumada a la anterior conlleva a la terminación del proceso.

Que en lo relativo al Proceso de Saneamiento de Cartera, las Regionales del ICBF recibieron instrucción del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica a través del Memorando S-2014-214305-0101, en donde se determinó: "(...) los funcionarios ejecutores deberán retomar su labor y competencia en forma directa, para ello deberán desarrollar el procedimiento fijado por esta entidad para la declaratoria de la prescripción o de la remisión de las obligaciones a su cargo, sin necesidad de que medie remisión y su posterior recomendación por parte de esta Oficina para que se decrete" y específicamente el memorando S-2017-545676-0101 del 06-10-2017, mediante el cual la Oficina Jurídica, Sede Nacional realizó el análisis de Gestión de Cobro Coactivo, que en el acápite de observaciones, dice: "*En los casos en que proceda el saneamiento de cartera la regional deberá dar aplicación al memorando bajo radicado S-2015-517221-0101 en el cual se dan los lineamientos sobre la competencia para la declaratoria del saneamiento de cartera de procesos de cobro coactivo*". El citado memorando nos remite al Art. 58 de la Resolución 384 de 2008, inciso segundo cuyo tenor literal establece:

*... "Cuando la obligación se encuentre en la etapa de cobro coactivo, los Funcionarios Ejecutores serán los competentes para decretar la prescripción de oficio o por solicitud de parte, siempre que se encontrare probada. Si esta fuese total se ordenará además la terminación y*

archivo del proceso; si fuere parcial continuará la ejecución por el saldo correspondiente...” Que en concordancia con lo anterior el numeral 3° del artículo 11 de la resolución 384 de 2008, establece:” **FUNCIONES DE LOS EJECUTORES.** Para el ejercicio de la competencia asignada a los funcionarios ejecutores, estos tendrán las siguientes funciones, además de las propias del cargo del cual son titulares:

“...3. Decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro y la remisión de la obligación, según el caso, cuando se encuentren configuradas dentro...”

Que en el presente caso ha operado la prescripción de la acción de cobro y como consecuencia de ello se decretará la terminación del proceso de conformidad con la Ley 1066 de 2006, Resolución 2934 de 2009 y en especial la Resolución No.0384 de 2008 en su art. 37, el cual establece:

**Art. 37. “TERMINACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO”.** El funcionario ejecutor dará por terminado el proceso administrativo de cobro y ordenará el archivo del expediente, cuando se establezca plenamente la ocurrencia de laguna de las siguientes causales:

1. pago total de la obligación
2. Prescripción total de la obligación
3. Por el decreto de remisibilidad, según el procedimiento establecido para tales efectos
4. Cuando los recursos o las excepciones hayan sido resueltos a favor del ejecutado
5. Por nulidad del acto administrativo que preste mérito ejecutivo

En la misma resolución que ordene la terminación del proceso se decretará el levantamiento de las medidas cautelares y se comunicará esta decisión a las entidades a quienes fueron comunicadas inicialmente las medidas...”

Que el Decreto 445 de 16 de marzo de 2017 reglamentó el párrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 sobre depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo, con el fin de que las entidades del orden nacional adelanten las gestiones administrativas necesarias para la depuración contable de manera que los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situación económica y financiera y permita tomar decisiones ajustadas a la realidad patrimonial institucional, por lo que en artículo 2.5.6.3 define como cartera de imposible recaudo la cual podrá ser depurada siempre que se cumpla una de las siguientes causales:

**a. Prescripción**

- b. Caducidad de la acción
- c. Pérdida de ejecutoriedad del acto
- d. Inexistencia probada del deudor o insolvencia
- e. Cuando la relación costo beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.

Que conforme a los lineamientos establecidos por el Icbf para el saneamiento de cartera, el presente caso fue sometido a consideración del Comité de Cartera y autorizado como consta en el Acta 01 de fecha 04 de diciembre de 2017

Que una vez comprobada la configuración del fenómeno, acorde con los parámetros establecidos por los artículos 5, 8 y 16 de la Ley 1066 de 2006, 817 y 820 del Estatuto Tributario y 58 y 60 de la Resolución N° 384 de 2008 “*Por la cual se subroga la Resolución número 2385 del 25 de septiembre de 2007 y se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en el ICBF*”, los Funcionarios Ejecutores son los competentes para decretar de forma directa la prescripción de la acción de cobro y la remisibilidad o condonación de las obligaciones a favor del ICBF.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE LA PRESCRIPCIÓN** de la acción de cobro de la obligación que posee la empresa **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA**, NIT: 900041040, por un capital de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$2.373.419)**, más los intereses que se hayan generado.

**ARTICULO SEGUNDO: DAR POR TERMINADO** el proceso administrativo de cobro adelantado en contra de la empresa **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA**, NIT: 900041040, expediente radicado con el N°142-09.

**ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE** la presente decisión a la Coordinación del Grupo Financiero de la Regional para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO: REMITIR** copia de la presente resolución a la **Oficina de Control Interno Disciplinario** para lo de su competencia, allegando copia de la Resolución y del memorando remitido a la Oficina Asesora Jurídica.


**ARTÍCULO QUINTO: LEVANTAR** las medidas cautelares decretadas dentro del proceso **ORDENESE** la entrega de títulos judiciales en el evento de que se hubieren generado como consecuencia de las medidas cautelares decretadas.

**ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE** al representante legal de la empresa **CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CIA LTDA**, del presente acto administrativo conforme al art. 565 y siguientes del E.T.N. y demás normas concordantes

**ARTICULO SEPTIMO: ARCHÍVESE** el expediente y háganse las anotaciones respectivas.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Cartagena, el 22 de enero de 2018



**OLGA EDEL JIMENEZ LEON**  
Funcionaria Ejecutora  
Grupo Jurídico - Cobro Coactivo

Proyectó: Olga E Jiménez L / Rafael E. Godoy H / P.U Abogados – Grupo Jurídico.

Revisó: Olga E Jiménez L / Funcionaria Ejecutora.